

## PRÓLOGO

---

En un hito extraordinario en la historia de la humanidad, durante todo el 2024 más de cuatro mil millones de personas en más de 40 países participarán de alguna forma en elecciones de sus autoridades.

Sin embargo, y contrario a lo que debería significar que más de la mitad de la población mundial tenga la posibilidad de elegir a quienes les gobiernan, el cierre del espacio cívico, el incremento notable de prácticas autoritarias en todo el mundo, los ataques a los sistemas de protección de derechos humanos y el establecimiento de políticas de demonización contra comunidades históricamente marginalizadas marcan un contexto sombrío en donde los procesos electorales parecieran meras simulaciones.

En la última década hemos sido testigos de cómo políticos de turno, y otros ya instalados por años, han fomentado y manipulado la incertidumbre, la privación de derechos y el descontento social para obtener ventajas electorales.

Un número creciente de líderes políticos ha propagado activa y sistemáticamente narrativas de demonización para obtener beneficios políticos. Ya sean “ideólogos” convencidos, nacionalistas fervientes u oportunistas, ofrecen soluciones simplistas y extremas a problemas sociales complejos que requieren un abordaje integral. Estos gobiernos liderados por políticos autoritarios llevan mucho tiempo fomentando y aprovechando la preocupación por la seguridad y el deterioro de las condiciones de vida, para instalar políticas represivas y de persecución contra voces críticas, especialmente si provienen de la sociedad civil organizada.

La instalación de prácticas autoritarias, algunas enmascaradas en reformas legales y otras simplemente a dedazo, se han convertido en la norma en muchos países, incluidos Hungría, Turquía, El Salvador, Polonia, Filipinas, India, Nicaragua y Venezuela, por nombrar algunos. Con sus prácticas autoritarias, muchos de estos políticos han socavado los controles y equilibrios, como la independencia del poder judicial y otras salvaguardias para proteger los derechos humanos, particularmente de grupos de población marginados.

Esto puede aumentar en un mundo que se enfrenta a múltiples crisis. La ineficacia y el debilitamiento de nuestros sistemas de gobernanza, desde los Estados e instituciones intergubernamentales que son constantemente cuestionados, así como la creciente aceptación de políticas populistas y autoritarias, incluidas las medidas punitivas y violatorias de derechos humanos, han creado tierra fértil para que estos gobiernos autoritarios aprovechen la sensación de fragilidad provocada por los cambios en el poder político, la volatilidad financiera mundial, los trastornos tecnológicos, la crisis climática y otras cuestiones.

Los movimientos de derechos humanos llevamos más de una década advirtiéndolo del deterioro persistente que se está produciendo en el respeto de los derechos humanos y el Estado de Derecho. El 2023 ha sido un año emblemático del estado de regresión, de la hipocresía de quienes levantan la bandera de protección de los derechos humanos y la justicia a conveniencia, y de la incapacidad de los liderazgos políticos a nivel mundial para enfrentar los desafíos existenciales que afectan a toda la humanidad, incluida la crisis climática, la propagación viral de conflictos, las desigualdades sociales y de género, la discriminación, el racismo sistémico, el armamentismo tecnológico y los modelos depredadores económicos.

Nuestros sistemas de protección global y los principios que se establecieron en la Declaración Universal de los Derechos Humanos hace 75 años, hoy están bajo el asedio por los mismos grandes poderes que los establecieron, y por otros terminan siendo instrumentalizados a conveniencia.

El actual conflicto en la franja de Gaza, dónde más de 30.000 personas han sido asesinadas, y más de dos millones están bajo un alarmante riesgo de genocidio como consecuencia de la retaliación de Israel por los ataques de Hamas y otros grupos armados del 7 de octubre del 2023, es una muestra clara del debilitamiento del sistema multilateral, ya bajo escrutinio constante. La falta de acción contundente para poner fin al derramamiento de sangre ha puesto en manifiesto la hipocresía de los Estados occidentales que reaccionaron con contundencia en apoyo a Israel, pero consienten los crímenes de guerra cometidos por sus fuerzas militares en contra de la población Palestina, reforzando la impunidad y la inestabilidad global. Junto con la invasión a

gran escala de Rusia contra Ucrania en curso, y el creciente número de conflictos armados y violaciones de los derechos humanos que se enfrentan, por ejemplo, en Sudán, Etiopía y Myanmar, el orden mundial basado en normas corre el riesgo de verse desmantelado.

Este doble estándar en la respuesta de la comunidad internacional también ha tenido resonancia en nuestro continente, dónde la selección a conveniencia y, muchas veces, como estrategia política, ha permitido que graves violaciones de derechos humanos continúen ocurriendo en países como Cuba, Nicaragua, Perú, El Salvador, Venezuela, Guatemala y, hasta en Canadá y Estados Unidos.

Ante las graves crisis, incluidos las históricas reivindicaciones sociales que los Estados no han podido o no han querido atender, millones de personas se han tomado las calles en varios países en el mundo, y frente a ello, los gobiernos actúan con medidas represivas para silenciar a quienes ejercer su derecho a exigir rendición de cuentas y la protección de sus derechos humanos.

Y en este contexto, es que las organizaciones y movimientos sociales y de derechos humanos también afrontamos el embate de los gobiernos contra nuestra mera existencia. En los últimos meses, hemos visto como declaraciones, regulaciones y hasta decisiones judiciales en países como Nicaragua, Guatemala, Venezuela, Argentina, Cuba, Honduras y El Salvador, entre otros, buscan limitar el accionar de organizaciones de la sociedad civil, que cada vez más resultan incómodas para los gobiernos. Las organizaciones de derechos humanos, en particular, se han convertido en la gran amenaza y un objetivo a desaparecer en varios países alrededor del mundo, siendo la región de América Latina y el Caribe la más peligrosa para la defensa de derechos.

Y la alarma suena, porque estos ataques parecieran el preparativo de un escenario peor. Sin sociedad civil organizada, los gobiernos tendrían el campo libre para seguir violando los derechos humanos con impunidad y sin consecuencias.

En Venezuela, dónde el gobierno de Nicolás Maduro había tratado de construir una narrativa propagandística de que “todo estaba mejorando”, con el apoyo cómplice de algunos países de la región y otros aliados, la simulación ha terminado. En los últimos meses el gobierno ha recrudecido su política

sistemática de represión con el objetivo claro de silenciar y castigar a quienes levantan la voz para defender derechos.

En pleno año electoral, el gobierno reimpulso un proyecto de ley de control de las organizaciones no gubernamentales, que de aprobarse formalizaría el control y sometimiento del espacio civil; es decir, permitiría al gobierno tener una sociedad civil a su medida, sin escrutinio, ni trabajo de defensa de derechos humanos. Ya el gobierno de Maduro ejerce una censura y persecución en contra de organizaciones de derechos humanos históricas en Venezuela, quienes por años han remplazado la responsabilidad de protección del Estado, representando a miles de víctimas y manteniendo una valiente vigilancia social que ha permitido visibilizar las graves violaciones de derechos y los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Maduro.

Los ataques contra las personas defensoras de derechos humanos y sus organizaciones en Venezuela han sido contantes. La reconocida defensora de derechos humanos Rocío San Miguel fue detenida arbitrariamente el 9 de febrero de 2024, sujeta de desaparición forzada de corta duración. Hasta la fecha, se encuentra recluida en el Helicoide, el centro conocido por las diversas denuncias de tortura, sin derecho a la defensa y sin que el gobierno haya presentado evidencias contundentes y creíbles de sus acusaciones.

Días posteriores a la detención de San Miguel, el gobierno venezolano anunció el cierre de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en Venezuela, lo que claramente muestra la preocupante escalada en los intentos del gobierno por eludir el escrutinio internacional y la rendición de cuentas. La reiterada burla del gobierno de Maduro a las resoluciones y denuncias de los organismos internacionales, y los intentos por socavar los esfuerzos de justicia han tenido consecuencias devastadoras para toda la población en el país.

Los informes de la Misión de las Naciones Unidas de Determinación de los Hechos sobre Venezuela han denunciado consistentemente las violaciones de derechos humanos que podrían constituir crímenes de lesa humanidad, y destacan la manipulación del sistema judicial para proteger a perpetradores, pero también para criminalizar la defensa de derechos. En su cuarto informe publicado en septiembre

del 2023, la Misión denunció la alarmante campaña de estigmatización y criminalización en contra de PROVEA, concluyendo que la organización y sus liderazgos han sido sujetos de reiterados ataques como consecuencia de su histórico trabajo de defensa.

En la última década, cientos de organizaciones de derechos humanos venezolanas e internacionales, incluida Amnistía Internacional, han documentado el uso de las detenciones arbitrarias por motivos políticos como parte de la política de represión. Estas detenciones son visiblemente substanciales en épocas electorales, siendo parte de un ataque generalizado y sistemático en contra de la población y, por ende, podrían constituir crímenes de lesa humanidad.

Es casi imposible predecir cuál va a ser el siguiente paso para silenciar la disidencia y las voces críticas en Venezuela en un año electoral muy complejo. Las organizaciones de la sociedad civil, las personas defensoras de los derechos humanos y las organizaciones humanitarias pueden enfrentarse ahora al periodo más peligroso de los últimos años.

Es posible que se produzcan modificaciones legales u otras restricciones a la capacidad de autoorganización de la sociedad civil, así como un aumento de las medidas arbitrarias selectivas contra los defensores de los derechos humanos. El deprecio que ha mostrado el gobierno venezolano por los sistemas de protección denotan que ha perdido toda inhibición o incentivo para abstenerse de atacar a los defensores de los derechos humanos.

Hoy más que nunca, la sociedad civil venezolana, las organizaciones y movimientos que la conforman, necesitan de la respuesta contundente de la comunidad internacional, y la solidaridad de los pueblos del mundo. El futuro de millones de personas en Venezuela depende de ello.

**Erika Guevara**

*Directora senior global de investigación, incidencia, política y campañas de Amnistía Internacional*